Introducción

Desde el regreso a la vida democrática en 1983, los argentinos atravesamos varias crisis económicas, políticas, sociales e institucionales. Basta recordar los levantamientos militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, luego el vaciamiento del Estado, la desocupación y el hambre provocados por el menemismo y su continuidad en el gobierno de Fernando de la Rúa, el argentinazo de 2001, el enfrentamiento de la Sociedad Rural contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por las retenciones, el retorno neoliberal con el macrismo, entre tantos otros sucesos históricos. Cuarenta años después, cuando creíamos que la democracia estaba consolidada o que al menos había un piso mínimo de acuerdo sobre no volver a la oscuridad de la dictadura, nos encontramos con un escenario inédito: todo es cuestionado en nombre de la libertad, pero se trata de una libertad basada en parámetros mercantilistas que derivan en la cosificación de la vida social y el desprestigio de la política como territorio cotidiano de disputa. Desde diciembre de 2023, la Argentina parece haber sellado un pacto de impunidad con el pasado habilitando discursos negacionistas, antiestatales y exacerbadamente violentos que clausuran la posibilidad de diálogo o el disenso. Tal vez, en el desgaste que generó el incumplimiento de las promesas de campaña del gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), los enfrentamientos internos y la presión generada por el endeudamiento externo encontremos algunas explicaciones, pero lo cierto es que cuando pensamos que el neoliberalismo había destruido lo suficiente, nos dimos cuenta que aún faltaba su escena más macabra: *matar al Estado*. Este objetivo —anunciado

Esther Levy

Profesora regular de la carrera de Ciencias de la Educación y del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (FFyL/UBA)
estherlevy01@gmail.com

en entrevistas, la red social X y discursos varios— estaría cumpliéndose. La batalla cultural se juega en desigualdad de condiciones, a la par que algunas fuerzas políticas mutaron para convertirse en nuevos libertarios en cuanto la ocasión lo requiera. En definitiva, somos testigos de un cambio de reglas de juego impuestas unilateralmente intentando hacernos creer que las luchas por justicia social, independencia económica y soberanía política no valieron la pena porque condujeron a una crisis terminal por fortalecer al Estado, lo que para el anarcocapitalismo es sinónimo de fortalecer al enemigo de la libertad.

En las antípodas de este razonamiento básico y sin mayores fundamentos que falacias y desprecio por lo colectivo (tildado despectivamente de comunismo, populismo o keynesianismo), este artículo propone reflexionar sobre un tema que el gobierno instaló y que creíamos ya discutido e incluso saldado: el *negacionismo* y la politización de lo que por naturaleza es político, esto es, los *derechos*.

Mientras miramos las viejas olas ¿ya somos parte del mar? El neoliberalismo en capítulos

La búsqueda de herramientas para analizar la actualidad implica, entre otras cosas, revisar los procesos históricos donde hubo etapas de impugnación al rol del Estado a la par del enaltecimiento del mercado como regulador de la vida económica y, en consecuencia, de la vida social. Lógicamente, llegamos al neoliberalismo ¿Pero qué neoliberalismo? ¿El de la ortodoxia neoliberal originaria a fines de la década de 1940 del que poco hablamos (Ezcurra, 1998), el de los años setenta y su consolidación en los años noventa o su *remake* en 2019 cuando el macrismo comenzó a instalar el marcionismo (“el curro de los derechos humanos”), lo que finalmente derivó en la ruptura del piso de acuerdo básico del que hablamos antes, a la vez que destruía los avances de la década anterior en materia de derechos sociales? Todas esas experiencias se edificaron sobre una base común: sacrificar —en mayor o menor porcentaje— las bases de la democracia vulnerando derechos sociales como la educación, el trabajo, la salud, la vivienda, etcétera, en aras de la libertad de mercado. En la dictadura, el modelo se instaló a base de sangre, persecución, tortura y desaparición, prescindiendo directamente de la democracia. Sin garantías constitucionales, el problema de los derechos sociales *desaparecía* allanando el camino hacia la *libertad*. Luego, en 1983, la

democracia prometía un horizonte de reconstrucción que se vio truncado por la presión de la deuda externa, la amenaza de los intentos de alzamientos militares al mismo tiempo que se realizó el juicio a los represores que, lamentable y contradictoriamente, volvieron a salirse con la suya gracias a las leyes de Obediencia Debida (1986) y Punto Final (1987).¹ Esto, junto al estallido hiperinflacionario y el adelantamiento de las elecciones presidenciales marcaron el final definitivo de la “primavera alfonsinista”. El menemismo, entre 1989 y 1999, sin reparo alguno y a espaldas de las promesas de campaña que se asentaban en algunos fundamentos de la doctrina peronista, le dio el tiro de gracia al Estado tal cual lo conocíamos aplicando una terapia de *shock* que justificó el ajuste económico y la reforma política (Grassi, 2003). En 1989, se sancionaron las dos leyes marco (Ley 23696 de Reforma del Estado en agosto y Ley 23697 de Emergencia Económica en septiembre) de lo que se denominó *ajuste estructural del Estado*: desregulación de los mercados limitando la intervención estatal en materia de subsidios, privatizaciones de empresas estatales, reducción del déficit fiscal y reasignación del gasto público, apertura de las importaciones, mientras que continuábamos endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que sumado a la estatización de la deuda externa privada, que se había llevado a cabo a finales de la dictadura, generó un escenario de parálisis productiva, desempleo, pauperización de las condiciones laborales, pobreza y exclusión. Para Grassi (2003) lo que ocurrió en esa etapa fue que “el neoliberalismo conformó un pensamiento individualista y estructural-determinista (aunque esto sea un contrasentido en sí mismo), articulando una estrategia de poder pragmática y abarcativa” (Grassi, 2003: 55). Lo curioso es que en esa etapa y en las posteriores no hizo falta un golpe de Estado para instalar las condiciones de pérdida de derechos humanos en general (la vida) y sociales en particular (condiciones para una vida digna). La aceptación por parte de las mayorías de este modelo de democracia formal, por un lado, enoja e indigna pero, por otro lado, aún no hemos encontrado herramientas efectivas para desandamiarlo. Si bien entre 1999 y 2001 gobernó Fernando de la Rúa no se considera este período como una etapa diferenciada del menemismo, en tanto su breve paso por la historia se reduce a la profundización de la crisis que dejó su predecesor lo que derivó en el estallido social de fines de diciembre de 2001.

Una cuarta ola de gobiernos neoliberales en nuestro país fue sin duda la etapa macrista (2015-2019) que se edificó sobre el desprecio hacia el kirchnerismo (2003-2015) en el plano ideológico, económico y social. Si bien

1. Luego, en 1989, Carlos Saúl Menem firmó el decreto que indultó a la cúpula militar de la dictadura y al jefe montonero Mario Firmenich.

intentó (y logró) recuperar la senda del menemismo, trajo una novedad que sedimentó el camino para lo que iba a suceder a partir de diciembre de 2023: *la inoculación del odio como aliado estratégico*. Este punto se retomará más adelante porque nos sirve para reflexionar sobre algo que nos cuesta explicar: por qué quienes se perjudican con políticas de derecha las eligen en las urnas.

El macrismo no necesitó cerrar programas y desactivar políticas, simplemente los desfinanció, mientras logró consenso social sobre la meritocracia como camino para lograr metas de bienestar. Su objetivo no era la inclusión, la justicia ni el desarrollo de las pymes, sino lograr que el capitalismo financiero se reproduzca con el menor costo posible maximizando las ganancias de la minoría empresarial. En esa escena, los trabajadores y sus derechos sobaban por lo que avanzó en una política de endeudamiento, criminalización de la protesta social, despidos masivos y estimación ideológica. También implementó reformas sectoriales como la previsional y un intento fallido de una reforma laboral, modificó normativas (como la paritaria docente) y derogó leyes (entre ellas, la de Servicios de Comunicación Audiovisual), convirtió ministerios nacionales en secretarías (como en los casos de Trabajo y Salud, Cultura, Ciencia y Tecnología), desmanteló las políticas de inclusión socioeducativas, a la vez que reinició el endeudamiento con el FMI (deuda que había cancelado el presidente Néstor Kirchner en diciembre de 2005). Estas acciones de desmantelamiento de avances del gobierno precedente tuvieron un gran impacto simbólico: atacar los derechos conquistados de las mayorías.

Así, con estos niveles de crueldad, lo que conocemos como neoliberalismo se transformó en algo más agresivo y profundo que nos cuesta analizar con las herramientas y categorías con las que contábamos hasta 2019. Lo que actualmente vivimos con el denominado *libertarianismo* o *anarcocapitalismo* es un fenómeno cuyos cimientos se pueden identificar en el neoliberalismo, pero nos proponen un sistema que puede prescindir de la democracia en términos jurídicos, sociales y cotidianos, lo que nos pone frente a un presente peligroso y un futuro incierto (y pesimista).

Matar al Estado (y la memoria): la fijación libertaria

Según la Real Academia Española, el adjetivo *libertario* es un elemento del "ideario anarquista, que defiende la libertad absoluta y, por lo tanto, la

supresión de todo gobierno y de toda ley” (RAE, 2023). No se trata de lo que opina un adolescente cuando los adultos le ponen límites, sino que es como se identifica ideológicamente el gobierno actual que —vaya paradoja— gracias a la democracia y sus leyes llegó a la presidencia de la Nación. Estamos frente a una situación inédita donde quien conduce se desautoriza a sí mismo, pero sin embargo consiguió llegar hasta aquí jugando el juego de la democracia (armó un partido político, perdió las elecciones generales, hizo alianzas y ganó las elecciones nacionales). Podemos decir muchas cosas más sobre esta escena que en campaña parecía metafórica —matar al Estado² y a su vez conducirlo—, pero nos interesa detenernos en lo que este proyecto vino a destruir: *los derechos sociales*.

En noviembre de 2023, La Libertad Avanza (LLA) llegó al gobierno con el 55,6% de los votos reunidos entre su partido y la alianza Juntos por el Cambio prometiendo corregir los privilegios de lo que su candidato denominó “casta política”. A la vez, dejó claro que la educación, la ciencia y la tecnología y otras políticas de gobierno vinculadas a los derechos sociales iban a quedar afuera³ de la esfera del financiamiento y la política pública (se ocuparía el mercado), como si eso fuera posible en democracia. Esta propuesta funcionó y ganó las elecciones, mostrando desinterés por la historia argentina, las leyes y la adhesión a pactos internacionales. El 10 de diciembre de 2023, el mismo día que la democracia argentina cumplió cuarenta años y que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, comenzó la cruzada contra el Estado, pero no contra la casta.

Nadie podría decir que ser libre es negativo, todo lo contrario, pero si ser libres implica hacer lo que queremos, no todos estamos en condiciones de serlo. Las desigualdades marcan los límites del ejercicio de la libertad y es ahí donde se hace necesario actuar sobre esas desventajas para, al menos, amortiguarlas o tender a equiparar condiciones. Sin embargo, ¿quién actuaría y con qué autoridad? Los particulares, las organizaciones sociales y la sociedad civil e incluso la Iglesia, suelen ocupar el rol de contención. Pero ¿quién es el responsable de resolverle los problemas a la población? ¿Quién tiene la obligación de hacerlo? Los libertarios responden que la solución está en cada individuo y apuntan al mercado como proveedor natural de las soluciones. Esa es la falacia sobre la que se edifica el retiro estatal y la “despolitización” de los derechos. Dicho esto, aquí focalizamos en dos cuestiones que LLA está llevando adelante: una, *la naturalización del negacionismo* (los genocidas son las víctimas) y, otra, la justicia social como aberración.

2. “Los políticos no son la solución, son el problema. No quieren que nada cambie porque va contra sus privilegios. Si ellos no quieren cambiar ¡vamos a sacarlos definitivamente!”, afirmó Milei en su discurso como candidato a presidente de LLA en el marco de la celebración de los alentadores resultados de las PASO (Micheletto, 2023: párr. 2).

3. Para profundizar se sugiere consultar: Filmus (2024).

Sobre el primer tema, apunta a desandamiar el consenso construido durante cuarenta años sobre los crímenes de la última dictadura argentina (1976-1983) reinstalando la teoría de los dos demonios, desfinanciando e insultando a los organismos de derechos humanos. Si bien en algunos sectores ha logrado incidir (sobre todo en aquellos más cercanos a la ideología castrense, que votaron a LLA), la mayoría de la sociedad argentina aún, y por ahora, no acompaña este plan. A modo de ejemplo, el 24 de marzo de 2024, luego de una provocación explícita desde el gobierno,⁴ la sociedad se volcó masivamente a las calles para conmemorar el Día de la Memoria acompañando a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia. Fue una marcha distinta a las de otros 24 de marzo, esta vez la democracia como forma de convivencia estaba en peligro. El nuevo gobierno niega los treinta mil desaparecidos en la dictadura y la violencia de Estado, a la vez que sostiene que hubo una guerra. Otra provocación fue la visita de los diputados oficialistas a los genocidas en las cárceles comunes, donde cumplen condena por crímenes de lesa humanidad, bajo la excusa de visitar a presos políticos. Lo difícil de entender es que ningún gobierno democrático sancionó una normativa que prohíba el negacionismo y, lamentablemente, estas y otras acciones similares están fuera del cuerpo de una ley y solo son alcanzadas por el repudio popular.

En relación al segundo tema —la justicia social como aberración—, el gobierno libertario dejó claro desde la campaña electoral su desprecio absoluto hacia lo estatal. Los subsidios al transporte y los servicios públicos domiciliarios (luz, agua y gas), a la educación, a la salud, a la vivienda, al medioambiente, etcétera, son presentados como obstáculos para el único objetivo concreto de la gestión libertaria: lograr el déficit cero, una medida de ajuste muy agresiva que recae sobre la clase trabajadora (Follari, 2024). Sin inocencia, el Presidente señala como una atrocidad que se solventen desde el Estado el costo de los derechos y sostiene que para eso está el mercado ¿El mercado vende derechos? ¿Los ejerce quien puede pagarlos? La idea que subyace es que no es justo robarles a algunos para satisfacer las necesidades de otros. Lo que irrita caprichosamente al Presidente es la redistribución progresiva del ingreso que hacen los Estados para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, es decir, que los sectores con mayor capacidad económica tributen para que los que tienen mayores dificultades puedan vivir mejor. A esto los libertarios lo llaman “robo” argumentando que será el mercado el mejor distribuidor de bienestar y que cada uno se arregle como pueda y con lo que pueda. Por otra parte, esta teoría —inaplicable

4. La provocación fue mediante un video de 12 minutos transmitido por las redes oficiales del gobierno nacional.

en el resto del mundo— es ilegal en nuestro país porque, tal como lo establece la Constitución Nacional y la adhesión a los pactos internacionales como el PIDESC,⁵ el Estado debe generar condiciones para el ejercicio de los derechos.

En definitiva, la derecha en sus disímiles versiones insiste con despolitizar lo inherentemente político, para otorgarle el rango de mercancía transable en el mercado, entendiendo al Estado como una intervención negativa para la libertad de acumular de los que más tienen. Lejos de proponer el desarrollo económico nacional, en cambio, los individuos y sus empresas son los únicos ganadores en este modelo de exclusión. Lo que no toman en cuenta o no les interesa a los libertarios es que este modelo (en otras versiones) fracasó dejando más recesión, pobreza y endeudamiento.

Pareciera que el proyecto libertario prescinde de la historia y de la experiencia colectiva para fundar un mundo ideal o imaginario donde los que creen en lo colectivo merecen quedar afuera.

Algunas palabras sobre la política de la crueldad

Desde 2015 en adelante, la derecha buscó a quién odiar y fue construyendo un enemigo público plausible de ser culpable de lo que los *focus group* indicaran. Los menores de edad, los inmigrantes latinoamericanos, los pobres, las disidencias sexogenéricas, los docentes, los sindicatos, las organizaciones sociales, etcétera, además de quienes son sospechosos de ser kirchneristas o estar cerca de serlo. Esto último tiene dos posibles explicaciones: por un lado, en la etapa 2003-2015 con aciertos y errores, se avanzó en las políticas de derechos humanos y restitución de derechos, temas que están en las antípodas de la derecha y más aún del libertarianismo. Por otro lado, el golpe de Estado de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón selló para siempre el sentimiento antiperonista de una parte de los argentinos quienes, aunque hayan gozado de la movilidad ascendente de las políticas peronistas y hoy son perjudicados por la derecha, están dispuestos a sacrificar lo poco que tienen a cambio de que a los que odia les vaya peor que a ellos y sus familias. Es decir, el odio político no es un estado emocional individual, sino una construcción minuciosamente diseñada que se inyecta a través del miedo a parecerse al señalado como amenaza. Es un trabajo de naturalización del malestar frente a algo que podría ser peor: parecerse a los que sufren, como si solo sufrieran algunos el ajuste, la precarización, la falta

5. La Constitución Nacional de 1994 establece en el artículo 75 inciso 24 la adhesión a pactos internacionales que el país se compromete a respetar. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Fue adoptado y abierto a la firma de los Estados el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigencia el 3 de enero de 1976. Hasta la fecha ha sido ratificado por más de ciento sesenta países. Junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Económicos conforma la Carta Internacional de Derechos Humanos.

de medicamentos, el cierre de fábricas, la quita de subsidios y, en definitiva, la imposibilidad de vivir una vida plena.

Las políticas de la crueldad paralizan y desorientan a los pueblos que han vivido el terror en primera persona. Desarman lo colectivo y buscan culpables para los problemas que una minoría genera en pos de maximizar sus ganancias. Pero el gobierno libertario hace del odio una política en sí misma reivindicando y fomentando la crueldad desde el plano discursivo (reivindica la dictadura, la conquista del desierto) y fáctico (reprime salvajemente a jubilados) desestimando cualquier negociación. El espectáculo del sufrimiento de las mayorías (aun de sus votantes) es la base de un gobierno que no gobierna más que con el miedo a las consecuencias de sus acciones. Podemos asegurar que estamos atravesando tiempos hostiles donde el destierro de la *igualdad* a manos de “la libertad” parece dejarnos sin herramientas para recuperar la promesa democrática de la inclusión y el ejercicio de los derechos.

Palabras finales

Según el Presidente, la raíz del problema de la Argentina es moral y radica en creer que hemos optado por lo que, con desprecio, denomina colectivismo, comunismo, populismo, socialismo, keynesianismo, y varios “ismos” más. Inspirado en Donald Trump y Jair Bolsonaro, se puso al hombro una cruzada para defender al mundo libre de Occidente. Incluso, llegó a culpar a Gramsci de esta situación (en uno de sus posts de la red social X) porque introdujo el socialismo a través de la cultura, los medios de comunicación y por supuesto, la educación. Por eso, termina deduciendo que el kirchnerismo, Perón y Eva Perón son comunistas, o algo así, porque sus políticas se basaron en la justicia social, la inclusión y la restitución y ampliación de derechos. Más allá de la demostración de supina ignorancia de la historia y las políticas del país que preside, es aquí donde podemos rastrear alguna pista para empezar a desandamiar este entramado falaz contra un proyecto de sociedad integrada e inclusiva.

Es un artículo pesimista, lo sé porque el escenario no es alentador. Pero, como dijo alguien, nos merecemos bellos milagros (veremos si ocurrirán) que dependen de nosotros (no serían milagros entonces, pero me gusta la frase). Sabemos que las categorías con que analizamos el neoliberalismo hasta ahora no nos están alcanzando y eso nos complica, pero no obstruye

la posibilidad de recuperar lo que sí nos sirvió. Coincidimos en que la derrota de 2023 fue por varios motivos, entre ellos, graves errores propios que el *shock* de las políticas libertarias aún no nos dejó problematizar. No obstante, hay que salir del estado de consternación para visibilizar mejores horizontes.

Tal vez sea desde el terreno de la educación y la cultura por donde hay que empezar a reconstruir las herramientas que desnaturalicen las falsas promesas presidenciales en discursos televisivos y redes sociales. Revisar cómo comunicamos, insistir con la formación política de los trabajadores en general y los docentes en particular, hacernos preguntas que incomoden nuestras certezas para fundamentarlas con mayor solidez al momento de querer plantear alternativas. El mayor desafío que tenemos hoy es a desarmar el relato hegemónico y a la vez analizar los motivos y mecanismos que logran que se instalen determinadas verdades entre quienes se ven perjudicados por esas verdades y, así, preguntarnos qué hay de verdadero en ellas y no solo qué hay de falso (Levy, en prensa). Por alguna razón, las ideologías son efectivas cuando están conectadas con los problemas reales de las personas (Apple, 1993). Desarticular los discursos autoritarios y negacionistas que se inoculan y naturalizan en el sentido común es el verdadero desafío político pedagógico que tenemos hoy y una buena punta para empezar a construir un sentido más igualitario y justo de la vida en democracia. A lo mejor es cierto que el que abandona no tiene premio.

Bibliografía

- Apple, M. (1993). *El conocimiento oficial: la educación democrática en una era conservadora*. Paidós.
- Ezcurra, A. M. (1998). *Evolución y límites de un modelo excluyente*. Ideas.
- Filmus, D. (comp.) (2024). *¡Afuera! El lugar de la educación y la ciencia en el anarcocapitalismo*. Octubre.
- Follari, R. (2024). Paleoliberalismo y educación: Estado mínimo y déficit cero. Filmus, D. (comp.), *¡Afuera! El lugar de la educación y la ciencia en el anarcocapitalismo*. Octubre.
- Grassi, E. (2003). *Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame, vol. I*. Espacio.
- Levy, E. (en prensa). El derecho a la educación en Argentina entre 2002 y 2019. Notas sobre la Educación de Adultos en los Programas de Transferencia Condicionada de Ingresos (PTCI). *Polifonías. Revista de Educación*. Departamento de Educación, UNLu.
- Micheletto, K. (2023). El candidato de ultraderecha resignificó el 'que se vayan todos'. 'La justicia social, esa aberración', el lema que Javier Milei eligió para el festejo. *Página 12*. En línea: <https://www.pagina12.com.ar/578531-que-se-vayan-todos-la-bandera-ganadora-de-milei> (Consulta: 10-10-2024).
- Real Academia Española (2023). *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed. [versión 23.7]. En línea: <https://dle.rae.es/libertario> (Consulta: 10-10-2024).